



## JUICIO ELECTORAL

EXPEDIENTE: TECDMX-JEL-096/2026

PARTE ACTORA: [REDACTED]

AUTORIDAD RESPONSABLE: ÓRGANO  
DICTAMINADOR DE LA ALCALDÍA  
AZCAPOTZALCO

MAGISTRADO PONENTE: ARMANDO  
AMBRIZ HERNÁNDEZ

MAGISTRADA ENCARGADA DEL  
ENGROSE: KARINA SALGADO LUNAR<sup>1</sup>

Ciudad de México, a siete de abril de dos mil veintiséis<sup>2</sup>.

El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en sesión pública de esta fecha, resuelve **sobreseer** en el juicio toda vez que la demanda **carece de firma autógrafa**.

### ANTECEDENTES

De lo narrado por la parte actora y de las constancias que obran en el expediente se advierten los hechos siguientes.

#### I. Contexto

**1. Convocatoria.** El nueve de enero de dos mil veintiséis, el IECM emitió la Convocatoria.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> **Secretario:** Pedro Antonio Padilla Martínez **Colaboración:** Arely Estefanía Vilchis Sánchez, María Fernanda Calderón Guerrero, Sergio Yael Caballero Filio y Katia Karen Luengas Rodríguez.

<sup>2</sup> En adelante, se entenderá que las fechas corresponden a la presente anualidad dos mil veintiséis, salvo precisión en contrario.

<sup>3</sup> IECM/ACU-CG-004/2026.

La leyenda de los datos testados se encuentra al final del presente acuerdo.

**2. Modificaciones.** En diversas fechas, el Consejo General aprobó acuerdos<sup>4</sup> a través de los cuales llevó a cabo modificaciones a la Convocatoria.

**3. Registro de proyecto.** En la convocatoria se estableció que las personas interesadas en presentar proyectos de Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2026-2027, podrían realizarlo de manera digital o presencial dentro del periodo comprendido entre el veinticinco de enero y el uno de marzo, por lo que, en su oportunidad, la parte actora solicitó el registro de los proyectos correspondientes.

**4. Dictaminación de los proyectos.** De acuerdo con la Convocatoria, del cuatro de febrero al diez de marzo, se realizaría la dictaminación de los proyectos. Asimismo, se estableció que, a más tardar el doce de marzo, se publicarían las dictaminaciones en la Plataforma Digital y en los estrados de las Direcciones Distritales.

**5. Redictaminación.** En su momento, la autoridad responsable emitió el segundo dictamen, a través del cual determinó nuevamente la inviabilidad de los proyectos.

**6. Aclaración.** En la Convocatoria se estableció que del trece al dieciséis de marzo, las personas proponentes de los proyectos dictaminados como “No viables”, la posibilidad de inconformarse mediante el formato F3, denominado Escrito de Aclaración.

**7. Publicación.** En su oportunidad, el Instituto Electoral publicó la determinación recaída a los proyectos presentados por la ahora promovente.

## **II. Juicio Electoral.**

---

<sup>4</sup> IECM/ACU-CG-013/2026, IECM/ACU-CG-018/2026 y IECM/ACU-CG-023/2026.

**1. Demanda.** El veintisiete de marzo, la parte actora presentó ante este Tribunal escrito de demanda, a fin de controvertir la nueva dictaminación negativa de los proyectos que presentó.

**2. Turno.** En la misma fecha, el magistrado presidente de este Tribunal Electoral, ordenó integrar el expediente **TECDMX-JEL-096/2026**, y turnarlo a la ponencia a su cargo<sup>5</sup>, a efecto de que se realizaran todos los actos y diligencias necesarios para su sustanciación.

**3. Radicación.** En su oportunidad, el magistrado instructor radicó el medio de impugnación en la Ponencia a su cargo, y ordenó la elaboración del proyecto de resolución, a fin de ponerlo a consideración del Pleno.

**4. Escrito en alcance.** El uno de abril, el Secretario Ejecutivo remitió un escrito en alcance en el cual esencialmente expuso las condiciones que dificultan las gestiones con las personas en prisión preventiva.

**5. Sesión pública.** En sesión pública de siete de abril, el Pleno de este Tribunal Electoral, rechazó por mayoría de votos el proyecto formulado por el Magistrado Armando Ambriz Hernández, determinándose la realización del engrose respectivo a la Magistrada Karina Salgado Lunar.

## RAZONES Y FUNDAMENTOS

### PRIMERO. Competencia

---

<sup>5</sup> Lo que se cumplimentó mediante oficio TECDMX/SG/665/2026.

Este Tribunal Electoral es competente<sup>6</sup> para conocer y resolver el presente **juicio electoral**, al estar relacionado con el desarrollo de un proceso de participación ciudadana, ya que la parte actora controvierte la re-dictaminación que declaró inviables los proyectos propuestos.

## **SEGUNDO. Sobreseimiento**

Este Tribunal Electoral considera que, con independencia de que pudiera actualizarse otra causal de improcedencia, el medio de impugnación debe sobreseerse en virtud de que la demanda **carece de firma autógrafa**, como se explica a continuación.

### **- Marco de referencia**

#### **a. Derecho de acceso a la justicia**

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Esta previsión coincide con lo establecido en los numerales 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 párrafo 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que toda persona tiene derecho a la administración de justicia en los términos referidos. Sin embargo, el acceso a la tutela jurisdiccional se supedita

---

<sup>6</sup> Ello en términos de lo establecido por los artículos 1, 17, 122, Apartado A, bases VII y IX en relación con el 116, base IV, incisos b), c) y l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, Apartado D, 38 y 46, Apartado A, inciso g), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 105 y 111 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 30, 31, 165, fracciones I y V, 171, 178, 179, fracciones II y VII, 182 y 185 fracciones II, III, IV y XVI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; 1, 28, 30, 31, 32, 36, 37, fracción I, 85, 102 y 103, fracción III de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México; así como 14, fracción V, 26, 124, fracción V, y 136, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

al cumplimiento de los presupuestos formales y materiales de procedencia para la acción respectiva, lo cual además de representar una exigencia legal, brinda certeza jurídica a las partes en un proceso.

Siguiendo esas pautas, el Estado puede y debe establecer *presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden desconocerse ni omitirse, ni siquiera a propósito de una interpretación pro persona*<sup>7</sup>.

Por tanto, resulta compatible con dicha previsión constitucional que el legislador de la Ciudad de México, al normar lo referente a la tutela jurisdiccional en materia electoral, establezca condiciones para el acceso a la misma y prevea distintas vías, cada una de las cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional.

En ese orden de ideas, los presupuestos de admisión previstos en la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México<sup>8</sup> no son meras formalidades tendentes para mermar el acceso a la justicia o impedir la emisión de una sentencia en la que se haga un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada.

En realidad, constituyen elementos mínimos necesarios para la correcta y funcional administración de justicia que corresponde a este Tribunal Electoral y, por consiguiente, la efectiva protección de los derechos de las personas.

---

<sup>7</sup> Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), de rubro “**PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES**”, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, pág. 1241; así como la diversa XI.1o.A.T. J/1, de rubro “**ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO**”, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, pág. 699.

<sup>8</sup> En los subsecuente, Ley Procesal.

Precisamente por ello, la procedencia de una acción en materia electoral depende del cumplimiento de los requisitos de admisión, los cuales varían atendiendo a la vía que se ejerza y el derecho cuya tutela se pide.

En el entendido de que la valoración de los presupuestos procesales debe ser objetiva, evitando interpretaciones formalistas y desproporcionadas que mermen el acceso a la jurisdicción.

***b. Causal de improcedencia por carecer de firma autógrafa***

El análisis de las causales de improcedencia constituye un elemento de estudio preferente que debe realizarse de oficio por este órgano jurisdiccional<sup>9</sup>, como a continuación se menciona.

De conformidad con el artículo 38 de la Ley Procesal, dicha normativa dispone que el trámite, sustanciación y resolución de todos los medios de impugnación se regirán conforme a lo previsto en el propio ordenamiento.

El artículo 47 de la Ley Procesal establece los requisitos que deberá contener todo medio de impugnación, entre ellos, la fracción VII dispone que todo medio de impugnación deberá presentarse por escrito y cumplir con el requisito de hacer constar el nombre y la firma autógrafa o huella digital de la parte promovente.

Acorde con esa exigencia, el artículo 49 del mismo ordenamiento, dispone, en su fracción XI, que los medios de impugnación serán improcedentes y, por tanto, se decretará el desechamiento de plano de la demanda cuando se omita hacer constar el nombre y la firma autógrafa o huella digital de la parte promovente.

---

<sup>9</sup> Sirve de apoyo el criterio sostenido en la Jurisprudencia: **TEDF1EL J001/1999** aprobada por este Tribunal Electoral, de rubro: **"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR EL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL"**

El artículo 50, fracción III, de la Ley Procesal dispone que el Pleno del Tribunal podrá decretar el sobreseimiento, cuando habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente aparezca o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en ese ordenamiento.

Lo anterior, en virtud que, la firma autógrafa implica la manifestación o voluntad del promovente de combatir el acto de autoridad que considera contrario a sus intereses, ello conforme a la Jurisprudencia 1/99 de la Sala Superior de rubro ***“FIRMA AUTÓGRAFA. EN LA PROMOCIÓN DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL SE SATISFACE ESTE REQUISITO, AUN CUANDO LA FIRMA NO APAREZCA EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y SÍ EN EL DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE DICHO MEDIO IMPUGNATIVO.”***.

En ese sentido, el artículo 80, fracción V, del citado ordenamiento prevé que si de la revisión que realice la Magistratura encuentra que el medio de impugnación incumple con los requisitos esenciales o encuadre en una de las causales de improcedencia, podrá someter a consideración del Pleno, la resolución para su desechamiento.

- ***Análisis del caso***

En el caso, la parte actora presentó la demanda ante este Tribunal **sin firma autógrafa o huella dactilar** en su caso, lo que implica la ausencia del elemento sustancial para demostrar una auténtica manifestación de voluntad de quien promueve el medio de impugnación.

Sin que pase inadvertido que el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México remitió copia certificada de un oficio que dirigió a la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y

Procesos Democráticos de este Tribunal Electoral, en el que le comunicó, entre otras cuestiones, que le enviaba los formatos en los que las personas proponentes en prisión preventiva autorizaron llevar a cabo todas y cada una de las gestiones necesarias para articular una debida defensa.

También aportó un oficio dirigido a las magistraturas de este Tribunal, en el que expone, esencialmente, que el Instituto Electoral de la Ciudad de México implementó aprobar en la Convocatoria Única, en su anexo 8, un formato de registro de proyectos de participación ciudadana en el que se recabara el consentimiento expreso por parte de las personas en prisión preventiva para que, ante la determinación de inviabilidad de sus propuestas, se llevara a cabo la interposición de un medio de impugnación.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México pretende justificar la falta de firma a partir de la supuesta representación que dice ostentar de la persona promovente, con motivo de un formato por el que la persona presentó, en su oportunidad, su solicitud de registro de proyecto de presupuesto participativo.

Esta circunstancia, en principio, no puede justificar la omisión de asentar la firma autógrafa, ya que **se trata de requisitos distintos**: **1. La firma autógrafa**, como requisito de autenticidad del escrito de demanda, y **2. La personería** de quien promueve por cuenta de otra persona, es decir, la calidad de representante con facultades suficientes para ejercer una acción judicial ante un Tribunal.

Así, cuando se ejerce una acción judicial por propio derecho o por conducto de un representante, **en ambos casos es necesario que quien promueve asiente su firma**, al tratarse de un requisito de autenticidad que permite identificar la autoría de un escrito de demanda.

Por otro lado, el citado documento contiene la fecha de 20 de febrero, congruente con la etapa de registro de proyectos (25 de enero al 1 de marzo) y previo a la conclusión de las etapas de dictaminación (4 de febrero al 10 de marzo) y re-dictaminación (17 al 21 de marzo) correspondientes, **lo que evidencia que no se firmó con la intención de presentar una demanda**, pues en todo caso se trataba de un hecho futuro contingente.

Así, la finalidad expresa de ese documento consistía en solicitar la presentación de un proyecto para el presupuesto participativo 2026 y 2027, porque es un hecho notorio<sup>10</sup> que se trata del formato aprobado por el Instituto Electoral, mediante acuerdo IECM-ACU-CG-004/2026, de 9 de enero de 2026, no así de una manifestación redactada por la persona proponente.

Por tanto, la solicitud de registro de proyecto no puede considerarse como la presentación de un medio de impugnación para controvertir la re-dictaminación negativa que alega la parte actora, por lo que el citado anexo no puede subsanar la falta de firma autógrafa.

Ello, porque la firma otorga certeza respecto a la voluntad de ejercer el derecho de promover un medio de impugnación, al dar autenticidad a la demanda, ya que permite identificar a quien emitió el documento y vincularle con el acto jurídico contenido en la misma, lo que no sucede en el caso.

---

<sup>10</sup> De conformidad con el artículo 52 de la Ley Procesal, así como en el criterio orientador contenido en la jurisprudencia XX.2o. J/24 y la tesis I.3o.C.450 C (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubros "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR" y "HECHO NOTORIO. LO CONFIGURA LA INFORMACIÓN DIFUNDIR EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO PÁGINA ELECTRÓNICA OFICIAL DE GOBIERNO", respectivamente.

Además, la firma no es un simple formalismo, sino que se trata de un requisito que garantiza la autenticidad del escrito de demanda y permite identificar con certeza quién asume la autoría y responsabilidad de lo que se afirma.

En el caso de las personas en prisión preventiva existe un deber reforzado de protección de sus derechos al tratarse de un grupo en situación de vulnerabilidad, por lo que es necesario que exista certeza de que las actuaciones que se llevan a cabo en su nombre y representación efectivamente se encuentren debidamente autorizadas por la persona que se afirma representar.

En consecuencia, al haberse admitido el medio de impugnación, lo procedente es sobreseer el juicio electoral, de conformidad con el artículo 50, fracción III, en relación el diverso 49, fracción XI, de la Ley Procesal, toda vez que la demanda carece firma autógrafa.

### **TERCERO. Vinculación al Instituto Electoral.**

Asimismo, este Órgano Jurisdiccional estima procedente vincular al Instituto Electoral, para que previo al siguiente proceso de presupuesto participativo y en los subsecuentes, implemente las acciones necesarias a fin de que las personas que se encuentren en prisión preventiva estén en posibilidades de presentar los medios de impugnación que correspondan cumpliendo los requisitos procesales respectivos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

## **R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Se **sobresee** en el juicio.

**SEGUNDO.** Se vincula al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que proceda en los términos planteados en la parte final de esta determinación.

**NOTIFÍQUESE** conforme a Derecho corresponda.

**PUBLÍQUESE** en su sitio de internet ([www.tecdmx.org.mx](http://www.tecdmx.org.mx)), una vez que esta sentencia haya causado estado.

Hecho lo anterior, en su oportunidad, **archívese** el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, las Magistraturas integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por **mayoría** de tres de votos a favor del Colegiado José Jesús Hernández Rodríguez y las Magistradas Laura Patricia Jiménez Castillo y Karina Salgado Lunar, con el voto en contra de los Magistrados Armando Ambriz Hernández y Osiris Vázquez Rangel, quienes emiten voto particular de manera conjunta, mismo que corre agregado a la presente sentencia, ante la Secretaria General, quien autoriza y da fe.

**INICIA VOTO PARTICULAR QUE DE FORMA CONJUNTA FORMULAN LOS MAGISTRADOS ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ Y OSIRIS VÁZQUEZ RANGEL, RELATIVO A LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS ELECTORALES EN LOS QUE SE DESECHAN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA.**

Con el debido respeto a nuestros pares, formulamos el presente voto particular, que recupera la parte conducente del proyecto de sentencia del Juicio Electoral en el que se actúa, rechazado por la mayoría de las integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional:

## **SEGUNDA. Procedencia.**

El medio de impugnación reúne los requisitos de procedibilidad<sup>11</sup>, como se explica a continuación:

### **2.1 Forma.**

La demanda se presentó por escrito, y en ella consta el nombre, se identifica el acto reclamado, los hechos en que se basa la impugnación y los agravios que le causa la determinación de la autoridad responsable.

### **2.2. Firma autógrafa o huella digital de la parte promovente.**

**Por lo que hace a la firma de quien promueve**, si bien, no se encuentra en el escrito de demanda, dado el contexto de la persona promovente, este Tribunal Electoral considera que es posible tener por satisfecho este requisito en los términos que a continuación se exponen:

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que las personas detenidas son propensas al potencial abuso de sus derechos, pues se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad ante la frecuente falta de políticas públicas y condiciones de violación sistemática de sus derechos humanos que son frecuentes en las prisiones.<sup>12</sup>

Por otro lado, la Sala Superior ha establecido con claridad que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar -ya que no han sido condenadas y, por tanto, se encuentran amparadas por el

---

<sup>11</sup> Establecidos por el artículo 47, de la Ley Procesal Electoral.

<sup>12</sup> Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Consultable en <https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf>

principio de presunción de inocencia- y que la suspensión de los derechos político-electorales a que se refiere la fracción II, del artículo 38 constitucional no puede aplicarse de manera automática sino interpretarse de forma armónica con el derecho al voto y los estándares internacionales de derechos humanos.<sup>13</sup>

Asimismo, ha indicado que la problemática que se genera en estos contextos no necesariamente versa sobre el reconocimiento del derecho al voto activo, sino en la falta de mecanismos que permiten ejercerlo, por lo que **el Estado, a través de los Institutos Electorales tiene la obligación de implementar medidas para hacerlo efectivo**, por lo que se estableció la obligatoriedad de la implementación progresiva de programas que garantizaran el ejercicio del voto de las personas en prisión preventiva, con miras a su plena materialización en procesos electorales futuros.

En ese contexto, por lo que hace a la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, en la Convocatoria se estableció que con el objeto de salvaguardar el derecho de participar en la vida política de la ciudadanía sin sentencia firme que suspenda sus derechos político-electorales, el Instituto Electoral garantizará el derecho de emitir su voto y opinión en la Elección y la Consulta, de conformidad con los principios de inclusión, legalidad, libertad y no discriminación.

Al efecto, se indicó que las personas en esta condición podrían registrar proyectos en la Unidad Territorial de su preferencia y emitir su opinión durante la Consulta y votar en la Elección en la Unidad Territorial que le corresponda.

---

<sup>13</sup> Al resolver los juicios ciudadanos SUP-JDC-352/2018 Y SUP-JDC-353/2018 ACUMULADO.

Al respecto, en la base Quinta del referido documento convocante se señaló que para la participación de personas en prisión preventiva, el Instituto Electoral se coordinaría con las autoridades del sistema penitenciario de la Ciudad de México.

Lo anterior, a fin de establecer un convenio de apoyo y colaboración para brindar las facilidades necesarias que les permitan conocer sobre la Elección de las COPACO, y la Consulta, así como registrar proyectos, presentar escritos de aclaración, emitir su votación y opinión y conocer los resultados de la Elección y la Consulta.

Para lo cual, **en atención a las circunstancias propias de las personas en prisión preventiva, se implementaría un formato simplificado<sup>14</sup> para el registro de las propuestas de proyectos de presupuesto participativo mismo que, además, contiene la expresión de la voluntad de las personas que los suscribieron para que, ante la eventual negativa, se presentara el medio de impugnación correspondiente, como se advierte de la parte final del mismo:**

En caso de que mi propuesta de registro sea dictaminada en la etapa correspondiente:

**A. En sentido negativo:**  AUTORIZO  NO AUTORIZO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 197, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, relativos a los procedimientos de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos proporcionados son verídicos, y solicito, en caso de que mi registro sea dictaminado en sentido negativo, el proyecto sea re-dictaminado, con ayuda de la Coordinación de Asesoría, Gestión y Seguimiento para que, de estimarlo procedente, ordene la integración del cuaderno de antecedentes respectivo y se emita el dictamen correspondiente, al tenor de las siguientes:

**PETICIONES**

Por lo anteriormente expuesto y fundado; a Ustedes C.C. Magistradas y Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, solicito respetuosamente:

**PRIMERO.** Tenerme promoviendo en tiempo y forma, el presente Juicio Electoral, mediante este escrito y pruebas documentales que acompaño.

**SEGUNDO.** Declarar procedente el juicio y entrar al estudio de la cuestión planteada.

**TERCERO.** Revoque el re-dictamen emitido en mi proyecto para el ejercicio fiscal correspondiente y en plenitud de jurisdicción lo declare viable.

<sup>14</sup> Aprobado por el Instituto Electoral al emitir la Convocatoria Única, como Anexo 8.

De lo anterior, se obtiene que las personas que firmaron el formato **otorgaron su consentimiento y solicitaron expresamente a las y los Magistrados de este Tribunal Electoral** que, de dictaminarse negativamente el proyecto presentado, **se tuviera por promovido en tiempo y forma el juicio electoral y se revocara el redictamen** que eventualmente recaería a la propuesta que se presentó.

Esta cuestión así se considera puesto que, en suma al contexto narrado del cual se advierte la implementación del mecanismo en la Convocatoria para privilegiar la participación del sector, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral allegó al presente expediente diversos elementos que deben tomarse en cuenta para comprender las dificultades materiales que tienen las personas en esta circunstancia, mismas que ponen de manifiesto los impedimentos que tiene este sector para apegarse a los requerimientos que en situaciones ordinarias, se exigen a las personas promoventes de los medios de impugnación.

En ese sentido, señaló lo siguiente:

**a. Observancia de los plazos legales:**

El diseño normativo procesal electoral establece términos acotados que imposibilitan realizar trámites presenciales en centros penitenciarios una vez conocido el resultado de la redictaminación:

- Publicación en estrados de resultados de redictaminación: 23 de marzo de 2026.
- Plazo para interponer medios de impugnación: Concluye el 28 de marzo de 2026.

- Margen de acción: Se contaba con 5 días naturales entre la publicación del resultado y el vencimiento del plazo legal para impugnar.

Con ello en mente, resultaba complicado poder lograr en tiempo y forma las visitas necesarias para hacer de conocimiento a la persona en prisión preventiva el resultado de la reedictaminación, recabar su consentimiento para promover medios de impugnación y nuevamente gestionar una visita para recabar su firma en los escritos de demanda correspondientes en el plazo procesal que se prevé para su tramitación, lo anterior si se toma en cuenta que de acuerdo con el "Procedimiento para gestionar visitas a Centros Penitenciarios", la organización conlleva lo siguiente:

**Trámite administrativo:** La solicitud a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario debe incluir el motivo de la visita, listas pormenorizadas del funcionariado que ingresará, además de describir los documentos y/o materiales con que se pretende ingresar.

Se requiere gestionar la solicitud de ingreso con al menos ocho días de anticipación a la fecha propuesta, debido a que la subsecretaría en mención, lo turna a la Dirección Ejecutiva de Prevención y Reinserción Social del Sistema Penitenciario quien a su vez lo remite a cada centro, en cada uno de éstos se analiza la solicitud por parte del Comité interno de coordinación que sesionan los miércoles de cada semana para en su caso, aprobar dichas peticiones.

Una vez que se cuenta con la aprobación del ingreso, la Dirección Ejecutiva de Prevención y Reinserción Social del Sistema Penitenciario informa al Instituto Electoral sobre la viabilidad de la visita, al tiempo de cuenta, en el caso particular de la promoción de

medios de impugnación, una vez realizada la visita para hacer de conocimiento el resultado de la redictaminación de inviabilidad de proyectos, se suma el tiempo necesario para que en este caso la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México elabore técnicamente el medio de impugnación con los argumentos particulares que atiendan al sentido negativo del dictamen.

**b. Idoneidad para implementar el Anexo 8 de la Convocatoria Única:**

Considerando la publicación de la redictaminación de proyectos, la instancia administrativa de cara al procedimiento administrativo de ingreso a los centros penitenciarios (8 días) identificó con antelación y en coordinación con la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que dicho trámite superaba en demasía el plazo legal para impugnar, entre que se notificaba a las personas promoventes del resultado y se pudiera generar la firma del medio respectivo, resultaba operativamente inviable agotar el trámite ordinario que se sigue a la interposición de los medios de impugnación, para estar finalmente a tiempo en torno a su promoción ante el Tribunal Electoral antes de la fecha de vencimiento del plazo.

Por lo tanto, la inclusión de las peticiones de Juicio Electoral en el Anexo 8 en el momento del registro se constituyó como la vía idónea considerando las particularidades del trámite para:

- 1. Garantizar el acceso a la justicia:** Permite que la voluntad de impugnar quede manifestada de forma autógrafa, evitando que las pautas procesales y los tiempos ante el ingreso a los centros

penitenciarios impidieran el ejercicio de derecho de defensa de las personas en situación de prisión preventiva.

2. **Cumplir con el principio de inclusión:** Asegurar que este sector de atención prioritaria cuente con ajustes procedimentales que les permitieran ejercer la tutela judicial generando condiciones similares de defensa que el resto de la ciudadanía, adaptando el procedimiento a sus circunstancias particulares de privación de la libertad.

En conclusión, el consentimiento previo en el Anexo 8 no es solo una medida de facilitación, sino una garantía indispensable para que el derecho a la impugnación de las personas en prisión preventiva no se convierta en una letra muerta debido a la incompatibilidad entre los plazos judiciales y los protocolos de seguridad penitenciaria.”

De lo anterior, se obtiene que el Instituto Electoral expone las condiciones que tornan de imposible cumplimiento los requisitos que suelen exigirse a la ciudadanía en general al interponer un medio de impugnación, tal como lo es que deben apegarse al "Procedimiento para gestionar visitas a Centros Penitenciarios", el cual, en conclusión, **implica el plazo mínimo de ocho días para que tal solicitud sea atendida y agendada por el comité correspondiente, el cual sesiona cada miércoles**, cuando, en el caso concreto, entre la publicación de la redictaminación y la fecha para presentar las demandas transcurrieron cinco.

De ahí que reitero que se tenga por eficaz el mecanismo implementado en la Convocatoria ante las complejas condiciones que tienen las personas en prisión preventiva y se tenga por expresada la

voluntad contenida en el anexo 8, suscrito con la intención de atenuar esta dificultad y hacer posible la participación de este sector.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se tiene que **la parte actora suscribió el citado formato simplificado**, identificado como “Solicitud de Registro de proyecto para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027” **con el objeto de hacer posible su participación en los términos indicados por la base quinta de la convocatoria.**

**- Marco normativo aplicable al presente caso y principio de completitud.**

En ese sentido, conforme a lo previsto en los artículos 1º y 17 de la Constitución Federal, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (los cuales contemplan los principios de interpretación más favorable a la persona, a favor de la acción, y de la acceso a la justicia), tal circunstancia es suficiente para colmar el requisito de asentar la firma en la demanda, puesto que ello expresa de manera fehaciente, la manifestación de la voluntad de quien suscribe el escrito inicial, de acudir ante este Tribunal, en la vía y forma correspondiente, para deducir sus derechos.

Ello en apego al principio de completitud, que impone a las personas juzgadoras la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones y elementos que les sean presentados<sup>15</sup>.

Lo anterior, atendiendo lo establecido en los artículos 17 de la Constitución Federal, 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles

---

<sup>15</sup> Sobre los alcances del principio de completitud, véase la tesis con registro digital 2005968, de rubro **EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.**

y Políticos, respecto al derecho de toda persona a una justicia “pronta, completa e imparcial”, que contempla la tutela judicial efectiva.

**¿Los derechos que tienen restringidos las personas en prisión preventiva no impactan al momento de impugnar la redictaminación?**

Las personas en prisión preventiva no solo se encuentran privadas de la libertad, sino que tienen restringidos **un cúmulo de derechos humanos, como lo son, entre otros, los de:**

- tránsito,
- asociación,
- reunión,
- **a la información** *-no fluye la información en prisión como sucede fuera de esos límites materiales-*,
- **al trabajo,**
- **a la vivienda,**
- **acceso a la cultura,**
- acceso al internet.

Consideremos entonces, que, quienes tienen restringido el acceso a internet, a sus comunicaciones, a la información, debían enterarse del resultado de la redictaminación para decidir si impugnan o no esa determinación.

Resulta evidente que la posibilidad de enterarse al mismo tiempo que la población en libertad no es exigible, y que si a ello le sumamos que tras eso, debían contactar a la persona que les redactaría o los asesoraría para presentar la demanda, luego, conocer puntualmente los términos de la demanda, para finalmente firmarla, y todo ello en cuatro días, lo que ha sido considerado como razonable para las

personas en libertad, pero no resulta así para las personas respecto de las cuales, como ya se ha señalado, es necesario pedir autorización para ingresar a verlas y llevarles los documentos necesarios para poder presentar la demanda, lo que lleva, como se ha precisado antes, más de ocho días, lo que supera el límite legalmente impuesto.

En este sentido, hay que considerar que el plazo de cuatro días para impugnar se encuentra en la normativa desde la misma se publicó por primera vez en 1999<sup>16</sup>, y que el derecho de las personas en prisión preventiva para presentar proyectos dentro del mecanismo de presupuesto participativo como participación ciudadana, data del año 2025, lo que muestra que no se ha considerado esta situación del grupo vulnerable en el marco normativo.

### **¿Las personas en prisión preventiva deben asumir la omisión legislativa o un inadecuado marco desarrollado por el IECM?**

**No.**

Aunque el marco normativo aplicable no prevé que, dada la situación material de las personas en prisión preventiva, de algún medio de impugnación adecuado para reparar violaciones a sus derechos político, **al tener restringidos un cúmulo de derechos humanos (como ya se ha precisado)**, en un ejercicio que evite la discriminación de este grupo y a fin de hacer posible la igualdad sustantiva, este Tribunal considera que las personas que se encuentren en tal circunstancia pueden acudir a reclamar la violación

---

<sup>16</sup> Desde el entonces Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial el 5 de enero de 1999, se preveía como requisito para la presentación del otrora recurso de apelación hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente. Asimismo, la primera ley específica en materia procesal electoral para el Distrito Federal -ahora Ciudad de México- la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de diciembre de 2007, señala, entre otros requisitos que deben considerar las demandas, el nombre y la firma autógrafa del promovente. Por su parte, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, a través de una reforma publicada el 13 de noviembre de 2023, incorporó el derecho de las personas que se encuentren sujetas a prisión preventiva sin sentencia firme a emitir su voto en diversas elecciones, entre otras, las de presupuesto participativo en esta entidad.

a sus derechos político-electorales si han expresado esa voluntad en un formato firmado de forma previa a la elaboración de la demanda.

De ahí que, en el caso en concreto resulta conforme a derecho realizar un ajuste razonable ponderando la situación de las personas que se encuentran en prisión preventiva y que solicitaron el registro de un proyecto para ejecutarse con presupuesto participativo en la Ciudad de México, de esta manera se genera igualdad sustantiva entre todas aquellas personas que ejercen su derecho a participar en la definición de los proyectos que serán sometidos a elección el día de la jornada electoral, lo anterior porque **resulta necesario ponderar la situación de desventaja en que se encuentran** conforme a lo siguiente:

**1. El derecho a participar en esta consulta es un fin constitucionalmente válido**, porque constituye un mecanismo fundamental de **democracia participativa** y deliberativa, por el que las alcaldías tendrán, en todo momento, la obligación de fortalecer la cultura ciudadana garantizando que la ciudadanía intervenga directamente en la toma de decisiones sobre el destino de una parte de los recursos públicos<sup>17</sup>.

**2. Permitir a las personas que se encuentran en prisión preventiva impugnar de forma previa a conocer el resultado de la re-dictaminación de sus proyectos, es una medida idónea** porque permite garantizar su derecho de acceso a la justicia dada las restricciones a su derecho a la información, porque no hay constancia de cuando se enteraron en prisión de los resultados y dado que esta información en prisión preventiva no es de circulación libre sino restringida.

---

<sup>17</sup> Artículo 26 de la Constitución Local.

3. En casos como el que se analiza, impugnar de manera previa **es una medida necesaria**, porque no se advierte alguna otra posibilidad para que pudieran impugnar cumpliendo con la oportunidad de ley, pues tendrían que enterarse del resultado de la re- dictaminación, contactar con quienes elaborarían la demanda, se tendría que elaborar la misma y luego llevárselas a firmar, contando con la posibilidad de reunirse con la persona en prisión preventiva de conformidad con las exigencias administrativas, de seguridad y actividades preagendadas del centro de reclusión, todo es en los siguientes cuatro días a que surtiera efectos la notificación de la re- dictaminación.

Considerando que entre que, se solicita a las autoridades del centro de reclusión y que es posible ingresar a recabar la firma, transcurre una semana.

4. Es **proporcional** en sentido restringido porque logrando el acceso a la justicia, aunque se flexibiliza de manera razonable un requisito de procedibilidad, solo se afecta un derecho instrumental o procedimental en favor del derecho sustantivo de acceso a la justicia, sin que se lesione el derecho de algún tercero, pues el admitir a trámite la demanda no dice nada aún respecto a que lo planteado en la misma sea correcto.

De esta manera, cuando la expresión de la voluntad para impugnar posterior a la elaboración de la demanda se encuentra limitada por las condiciones de reclusión, pero que es posible identificar de forma innegable en un formato suscrito de forma autógrafa de forma previa, este Tribunal tiene la **obligación ineludible de resolver el**

**conflicto** planteado, incluso cuando no existe una norma jurídica específica aplicable a la situación.

### **¿Cómo debe interpretarse la firma autógrafa plasmada en el Anexo 8 de la solicitud de registro de proyectos?**

Primeramente, es un hecho no controvertido que la firma que se encuentra plasmada en el documento es autógrafa y que corresponde al actor.

En segundo lugar, es posible concluir que la firma del formato referido no puede considerarse como el consentimiento para impugnar dado que no se conoce en ese momento ni la resolución de la re-dictaminación, ni el contenido de la demanda, sin embargo, es conforme a derecho concluir que es voluntad de las personas en prisión preventiva, agotar la cadena impugnativa, dado el caso de que no se redictamine de forma favorable a sus intereses.

Y entre esas dos posibles interpretaciones, a fin de estar a lo que más favorezca a los integrantes del grupo vulnerable, se considera que debe estarse a la segunda interpretación de su firma autógrafa.

Solo eso permite cumplir con el parámetro constitucional y convencional<sup>18</sup>.

#### **- Conclusión respecto a la presencia de firma autógrafa.**

---

<sup>18</sup> Constitución Local. **Artículo 4** *Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos.* **1.** En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales... **6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas,** dejando de aplicar aquellas normas contrarias a esta Constitución...

**C. Igualdad y no discriminación** 1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. **Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.**

En el caso, en la última foja del escrito de demanda, con posterioridad al apartado de peticiones, se aprecia únicamente el nombre completo de la persona promovente.

Y si bien tal circunstancia, en principio, podría actualizar la causal de improcedencia prevista en el artículo 49 fracción XI de la Ley Procesal, **una interpretación más favorable a los derechos humanos de las personas proponentes en situación de prisión preventiva permite afirmar que sí se colmó ese requisito de procedibilidad con la firma autógrafa del Anexo 8.**

Así, es que este Tribunal Electoral, en atención a las condiciones particulares que tiene este grupo en situación de vulnerabilidad y debido a que el diseño normativo imposibilitaría el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales (y de participación ciudadana, en este caso) es que **se tiene por expresada la voluntad en los términos del anexo que fue debidamente suscrito y dirigido a este tribunal en fecha previa**, con el objeto de que se tuviera por presentada su inconformidad ante la eventual dictaminación en sentido negativo de su proyecto.

Determinar lo contrario, **implicaría la denegación de justicia y el desconocimiento pleno del mecanismo aprobado en la Convocatoria para privilegiar la participación de las personas en prisión preventiva**, lo cual, a la postre generaría la preservación de la problemática identificada por la Sala Superior, de ahí que se tenga, por excepción, por debidamente cumplido el requisito.

**2.2 Oportunidad.** Por regla general, los medios de impugnación deben ser promovidos dentro del plazo de cuatro días, contados a partir del día siguiente al que se tenga conocimiento del acto impugnado o que haya sido notificado el mismo.

En este contexto, tomando en consideración que el acto impugnado se notificó el día veintitrés de marzo y la presentación de la demanda se realizó el veintisiete de marzo, resulta evidente que la demanda fue presentada oportunamente.

**2.3 Legitimación e interés jurídico.** Estos requisitos se tienen por satisfechos<sup>19</sup>, debido a que la parte actora controvierte la segunda dictaminación negativa de los proyectos que presentó.

**2.4 Definitividad.** Este requisito se encuentra cumplido dado que no existe un medio de impugnación diverso que la promovente deba agotar previo a acudir a la presente instancia.

**2.5 Reparabilidad.** El acto impugnado no se ha consumado de modo irreparable porque, de estimarse fundados los agravios, aún es susceptible de revocación, modificación o anulación por este órgano jurisdiccional y, en consecuencia, es posible restaurar el orden jurídico que se considera transgredido.

### **TERCERA. Materia de la controversia.**

Este Tribunal Electoral analizará de manera íntegra el escrito de demanda<sup>20</sup>, a efecto de identificar los agravios, con independencia de su ubicación, toda vez que no es requisito que estén contenidos en un capítulo especial. De ser el caso, se suplirá la deficiencia en la expresión de la inconformidad para desprender el perjuicio que señala la parte actora y salvaguardar su garantía de acceso a la justicia.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> De conformidad con lo previsto en el artículo 46, fracción IV, y 103, fracción I, de la Ley Procesal Electoral.

<sup>20</sup> En ejercicio de la atribución dada por los artículos 89 y 90, de la Ley Procesal.

<sup>21</sup> Al respecto, es aplicable en lo conducente la **Jurisprudencia J.015/2002** de este Tribunal Electoral, de rubro: **"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL"**.

Lo anterior no implica una suplencia total, ante la ausencia de hechos de los que se desprendan agravios, ya que corresponde a la parte actora la carga de indicar, al menos, la lesión que ocasiona el acto o resolución impugnados, así como los motivos que originaron ese perjuicio<sup>22</sup>. De esta manera, este órgano jurisdiccional no está obligado a estudiar oficiosamente agravios que no fueron invocados, puesto que ello no constituiría una suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel de las personas que promueven.

### **3.1 Pretensión.**

La pretensión de la parte actora es que se revoque la segunda dictaminación de inviabilidad que se emitió respecto de los proyectos que presentó, a fin de que se emita uno nuevo fundado y motivado, y se determine su viabilidad.

### **3.2. Causa de pedir.**

La causa de pedir radica en la falta de fundamentación y motivación del acto impugnado, lo cual genera una vulneración al derecho de participación de la promovente.

### **3.3 Agravios.**

En esencia, la parte actora señala que la falta de fundamentación y motivación del acto viola sus derechos de legalidad y seguridad jurídica; así como la falta de exhaustividad de la autoridad responsable por lo siguiente:

- Los re-dictámenes impugnados carecen de una debida fundamentación y motivación al contravenir lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional y últimos párrafos del artículo 126 de la Ley de Participación.

---

<sup>22</sup> De conformidad con el artículo 47, de la Ley Procesal Electoral.

- La falta de exhaustividad respecto a la omisión de la aplicación de las reglas que rigen el procedimiento de la dictaminación de los proyectos.
- 8UI Reiteración del contenido de los dictámenes primigenios, sin atender o desvirtuar los argumentos formulados en los escritos de aclaración.

### 3.4 Metodología.

Los motivos de inconformidad se analizarán en el orden en que fueron expuestos, sin que ello cause afectación jurídica a la parte actora porque lo relevante es que todos sus agravios sean estudiados con independencia del orden con el que se realice.<sup>23</sup>

## CUARTA. Estudio de fondo.

### 4.1 Decisión.

Este Tribunal considera que los motivos de disenso expuestos por la promovente resultan **inoperantes**, por lo que lo procedente es **confirmar** la segunda dictaminación llevada a cabo por el órgano dictaminador de la Alcaldía Azcapotzalco.

### 4.2 Marco normativo.

#### 4.2.1 Presupuesto Participativo.

El Presupuesto Participativo es el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación de recursos económicos que otorga el Gobierno de la Ciudad<sup>24</sup>. La finalidad es que sus habitantes optimicen su entorno, al proponer obras y servicios, equipamiento y la infraestructura urbana y, en general,

---

<sup>23</sup> En términos de la Jurisprudencia 4/2000, de rubro: “**AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN**”. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6.

<sup>24</sup> De conformidad con el artículo 116 de la Ley de Participación.

cualquier mejora para sus unidades territoriales, sin que, de forma alguna suplan o subsanen las obligaciones que las alcaldías deben realizar como actividad sustantiva.

El Presupuesto Participativo deberá estar orientado al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes.<sup>25</sup> Los recursos se destinarán al mejoramiento de espacios públicos, a la infraestructura urbana, obras, servicios, así como actividades recreativas, deportivas y culturales.

Las etapas de la Consulta son las siguientes:

**a. Emisión de la convocatoria.** Le corresponde al Instituto Electoral.<sup>26</sup>

En colaboración con el Gobierno de la Ciudad, garantizará que en cada una de las unidades territoriales se publiciten las distintas etapas de la consulta, entre ellas, el instrumento convocante.<sup>27</sup>

**b. Asamblea de diagnóstico y deliberación.** En cada una de las unidades territoriales se llevará a cabo una Asamblea Ciudadana con el fin de realizar un diagnóstico comunitario de sus necesidades y problemáticas.<sup>28</sup> Para ello contarán con el acompañamiento del Instituto Electoral y de personas especialistas en la materia.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Participación.

<sup>26</sup> Artículo 120, inciso a), de la Ley de Participación.

<sup>27</sup> Artículo 123 de la Ley de Participación.

<sup>28</sup> De acuerdo con la Base Primera de la Convocatoria, se celebraron del dieciocho de enero al quince de febrero. La publicación de las convocatorias, en la Plataforma Digital, se hará a partir del 16 de enero y hasta el 12 de febrero de 2026; y, de los listados de problemáticas y prioridades, a partir del 19 de enero y hasta el 20 de febrero de 2026 en la Plataforma Digital.

<sup>29</sup> De conformidad con el artículo 120, inciso b) de la Ley de Participación.

**c. Registro de proyectos.** Toda persona habitante de una unidad territorial podrá presentar proyectos de Presupuesto Participativo ante el Instituto Electoral de manera presencial o digital.<sup>30</sup>

**d. Validación técnica de los proyectos.** El órgano dictaminador de cada alcaldía evaluará el cumplimiento de los requisitos de los proyectos, para lo cual deberá contemplar la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto y beneficio comunitario y público.<sup>31</sup>

Esto ocurrirá conforme al calendario que establezca cada órgano dictaminador, el cual será publicado en la Plataforma del Instituto Electoral.<sup>32</sup> Una vez que sean dictaminados los proyectos serán remitidos al Instituto Electoral.

#### **4.2.2 Principio de legalidad.**

De acuerdo con el principio de legalidad, todos los actos y resoluciones en materia electoral deben sujetarse invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y a las disposiciones legales aplicables. En ese sentido, el artículo 16 constitucional, en su primer párrafo, establece el imperativo para toda autoridad de fundar y motivar los actos que incidan en la esfera jurídica de las personas.

Las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación deben satisfacerse en atención a la naturaleza del acto emitido. Así, la fundamentación implica la cita precisa de los preceptos legales

---

<sup>30</sup> El artículo 120, inciso c) de la Ley de Participación. De conformidad con la Base Segunda de la Convocatoria, la presentación fue desde las 09:00 horas del quince de enero hasta las 24:00 horas del 1 de marzo, a través de la Plataforma Digital; y del veinticinco de enero al uno de marzo, en las oficinas de la Dirección Distrital que corresponda a la unidad territorial en la que se quiera registrar proyecto.

<sup>31</sup> Artículo 126, de la Ley de Participación.

<sup>32</sup> Del cuatro de febrero al diez de marzo se realizará la dictaminación de los proyectos.

El doce de marzo serán publicadas las dictaminaciones en la Plataforma Digital y en los estrados de las Direcciones Distritales.

Las personas proponentes cuyos proyectos sean calificados inviables podrán presentar del trece al dieciséis de marzo, un escrito de aclaración ante el órgano dictaminador o un juicio ante el Tribunal.

Del diecisiete al veintiuno de marzo, los órganos dictaminadores realizarán la segunda dictaminación de proyectos en atención a los escritos de aclaración presentados. El veintidós de marzo enviarán los proyectos de nuevos dictámenes a las Direcciones Distritales Cabecera de Demarcación para que sean entregados a las Direcciones correspondientes, y serán publicados el veintitrés de marzo.

aplicables al caso concreto, mientras que la motivación consiste en la expresión clara, lógica y congruente de las razones y circunstancias particulares que llevaron a la autoridad a emitir la determinación correspondiente, debiendo existir una adecuada correspondencia entre los hechos del caso y las normas jurídicas invocadas.

En este sentido, no basta con señalar de manera genérica disposiciones legales o formular afirmaciones abstractas, sino que la autoridad está obligada a exteriorizar un razonamiento que permita advertir por qué, en el caso específico, se actualiza el supuesto normativo que sustenta su decisión.

El referido principio de legalidad se encuentra estrechamente vinculado con el sistema de justicia electoral, por lo que tales exigencias deben observarse de manera estricta por las autoridades al emitir actos que incidan en los derechos de participación ciudadana.<sup>33</sup> Ahora bien, la inobservancia de dicho mandato constitucional puede manifestarse bajo dos vertientes: la falta de fundamentación y motivación, o bien, su indebida o incorrecta realización.

La falta de fundamentación y motivación se actualiza cuando la autoridad omite citar los preceptos legales aplicables o deja de expresar las razones que justifican su determinación; mientras que la indebida fundamentación y motivación ocurre cuando, aun citando normas y exponiendo argumentos, éstos no resultan aplicables al caso concreto o no guardan congruencia con los hechos que se pretenden sustentar.

En este contexto, la debida fundamentación y motivación no sólo constituye una formalidad exigida por la Constitución, sino que tiene

---

<sup>33</sup> Tal como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 21/2001, de rubro “**PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL**”.

como finalidad garantizar el principio de certeza jurídica, entendido como el derecho de las personas a conocer con claridad, precisión y congruencia las razones que sustentan los actos de autoridad, a fin de evitar arbitrariedades y permitir el ejercicio pleno de sus derechos.

Ahora bien, el principio de **exhaustividad** consiste en que las autoridades, administrativas y jurisdiccionales, agoten la materia de todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, mediante el examen y determinación de la totalidad de las cuestiones concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que no se den soluciones incompletas. Este principio debe satisfacerse mediante el análisis de todas las demás cuestiones no comprendidas en el obstáculo de que se trate, pues si bien es cierto que la falta de una formalidad esencial (o de un presupuesto procesal) no permite resolver el contenido sustancial atinente, también es verdad que esto no constituye ningún obstáculo para que se examinen los demás elementos que no correspondan a los aspectos sustanciales, por lo que la omisión al respecto no encuentra justificación, y se debe considerar atentatoria del principio de exhaustividad<sup>34</sup>.

#### **4.2.3 Participación de personas en prisión preventiva, como proponentes para la consulta de Presupuesto Participativo 2026 -2027**

En términos de Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, en el presupuesto participativo podrán participar todas las personas que reúnan los requisitos establecidos en la Ley de Participación y plasmados en la Convocatoria, incluyendo a las **personas ciudadanas en situación**

---

<sup>34</sup> Conforme a la tesis **XXVI/99** emitida por la Sala Superior de rubro: **EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS FORMALIDADES ESENCIALES**. Consultable en <https://www.te.gob.mx/ius2021/#/>

**de prisión preventiva**, quienes podrían registrar proyectos **en la UT de su preferencia**; y emitir su opinión durante la Consulta en la UT que le corresponda.

En tanto que, en la Base Quinta de la citada Convocatoria, para la participación de personas en prisión preventiva, el IECM se coordinará con las autoridades del sistema penitenciario de la Ciudad de México, a fin de establecer un convenio de apoyo y colaboración para brindar las facilidades necesarias que les permitan conocer sobre la Consulta, registrar proyectos, presentar escritos de aclaración, emitir su opinión y conocer los resultados de la Consulta.

El IECM identificará las Unidades Territoriales en las que están registradas las personas en prisión preventiva, según la Lista Nominal de Electores con Fotografía en Prisión Preventiva -LNEPP- de la Ciudad de México, a fin de que emitan su opinión en la UT que les corresponda.

De así resultar procedente, la conformación de la LNEPP se realizará en atención a las previsiones técnicas que lo hagan posible y que así determine la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral.

Las personas en prisión preventiva podrán participar siempre y cuando:

- a) No hayan sido suspendidas de sus derechos político-electorales por sentencia condenatoria o resolución en la que se imponga como pena la suspensión de los derechos indicados;
- b) Estén en el supuesto de prisión preventiva en un centro penitenciario de la Ciudad de México, y

- c) Manifiesten su intención de emitir su opinión de manera anticipada.
- d) Se mantengan en el Centro Penitenciario en el que fueron registrados en la fecha en la que se lleve a cabo la Jornada Anticipada para dicho centro.
- e) Estén inscritas en la LNEPP de la Ciudad de México, con corte al quince de marzo.

### 4.3. Justificación

La Sala Superior<sup>35</sup> ha considerado que para analizar un concepto de agravio su formulación debe ser expresando claramente la causa de pedir, detallando la lesión o perjuicio que le ocasiona la sentencia impugnada (o acto impugnado), así como los motivos que originaron ese agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección del escrito de demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica.

Así, cuando la parte actora omite expresar argumentos debidamente configurados, en los términos anticipados, éstos deben ser calificados como inoperantes, ya sea porque se trate de:

- Una simple repetición respecto de los argumentos expresados por la autoridad responsable en la dictaminación primigenia.
- Argumentos genéricos o imprecisos de tal forma que no se pueda advertir la causa de pedir.
- Cuestiones que no fueron planteadas en los medios de impugnación cuya resolución motivó el medio de impugnación que ahora se resuelve.

---

<sup>35</sup> Jurisprudencia 03/2000, de rubro: "AGRAVIOS, PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR".

- Argumentos que no controviertan los razonamientos de la responsable, los cuales son el sustento de la sentencia o acto impugnado.
- Resulte innecesario su estudio ante la circunstancia de que, por el contenido o fin que se pretende alcanzar, no conduzca a algún efecto práctico o incluso teniéndolo, no sea posible resolver la cuestión planteada sobre la base de esas manifestaciones, al existir una determinación o prohibición expresa en la Constitución o ley aplicable, y
- Cuando se haga descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en un motivo de disenso que haya sido desestimado, lo que haría que de ninguna manera resultara fundado u operante, por basarse en la supuesta procedencia de aquél.

El artículo 89 de la Ley Procesal establece que en los medios de impugnación, este Tribunal deberá suplir las deficiencias u omisiones en la argumentación de los agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos, sin que tal suplencia pueda ser total, pues para que opere es necesario que en los agravios, por lo menos se señale con precisión la lesión que ocasiona el acto o resolución impugnada, así como los motivos que originaron ese perjuicio, para que con tal argumento expuesto por la parte enjuiciante, dirigido a demostrar la ilegalidad de las consideraciones que la responsable tomó en cuenta para resolver en el sentido que lo hizo, el tribunal lo estudie con base en los preceptos jurídicos aplicables.

De manera que, no basta que la parte recurrente exprese los agravios en forma genérica y abstracta, es decir, que se concrete a hacer simples aseveraciones, sino que se requiere que exponga de manera razonada los motivos concretos en los cuales sustenta sus

alegaciones, para que el órgano jurisdiccional emprenda el examen de la legalidad de la resolución impugnada. En otras palabras, es necesario que explique el porqué de sus aseveraciones, pues de lo contrario los agravios resultarán inoperantes.

Sirve de criterio orientador la tesis aislada emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, de rubro: **“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LAS SIMPLES EXPRESIONES GENÉRICAS Y ABSTRACTAS CUANDO NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”**<sup>36</sup>.

#### **4.4. Caso concreto.**

Tal y como fue señalado, la parte actora cuestiona lo expuesto por la autoridad responsable en el acto impugnado, porque estima que el mismo carece de una debida fundamentación y motivación.

Asimismo, señala que la autoridad responsable incumple el principio de exhaustividad, pues no hizo un análisis puntual del escrito de aclaración presentado por la parte actora, con el fin de que el dictamen inicial fuera reformulado; siendo por tanto, omisa en aplicar las reglas que rigen el procedimiento de dictaminación de los proyectos de presupuesto participativo, sin considerar de manera individualizada, completa y congruente cada uno de los planteamientos expuestos en sus escritos de aclaración, ello, ante la limitación en la reiteración del contenido de sus dictámenes primigenios.

Constituye un hecho notorio<sup>37</sup> la existencia y contenido de los dictámenes y re-dictámenes correspondientes a los proyectos,

---

<sup>36</sup> Consultable en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1600, registro 176045.

<sup>37</sup> De conformidad con el artículo 52 de la Ley Procesal.

emitidos por el Órgano Dictaminador, al encontrarse publicados en la página electrónica del Instituto Electoral<sup>38</sup>

Por lo que hace a los primeros dictámenes y el re-dictámenes de dichos proyectos, en la parte que interesa, se advierte lo siguiente:

RUBRO	Dictamen	Re-Dictamen
Viabilidad técnica	Ajuste.  Como resultado de un análisis exhaustivo (dimensiones, ubicación, características técnicas, costo de materiales y rendimientos de mano de obra), el área técnica especializada ha determinado, con base en costos paramétricos que el presupuesto estimado para la ejecución del proyecto no tiene viabilidad.	Ajuste.  Como resultado de un análisis exhaustivo (dimensiones, ubicación, características técnicas, costo de materiales y rendimientos de mano de obra), el área técnica especializada ha determinado, con base en costos paramétricos que el presupuesto estimado para la ejecución del proyecto no tiene viabilidad.
Viabilidad Jurídica	No es viable jurídicamente, pues contraviene lo establecido en el artículo 120 inciso D) de la Ley de Participación Ciudadana respecto a la validación técnica de los proyectos, ya que el proyecto no cuenta con viabilidad técnica para su ejecución.	No es viable jurídicamente, pues contraviene lo establecido en el artículo 120 inciso D) de la Ley de Participación Ciudadana respecto a la validación técnica de los proyectos, ya que el proyecto no cuenta con viabilidad técnica para su ejecución.
Viabilidad Ambiental	No existe inconveniente alguno para la ejecución del proyecto, siempre y cuando se observe que con el proyecto en cuestión no se contravengan disposiciones normativas en materia ambiental.	No existe inconveniente alguno para la ejecución del proyecto, siempre y cuando se observe que con el proyecto en cuestión no se contravengan disposiciones normativas en materia ambiental.
Viabilidad Financiera	No cumple.  El proyecto no es viable financieramente, el monto del presupuesto participativo asignado a la Unidad Territorial resulta insuficiente para cubrir el costo total de la ejecución del proyecto con las características específicas.	No cumple.

<sup>38</sup> Por ello, es aplicable la jurisprudencia XX.2o. J/24, de los Tribunales Colegiados, de rubro **“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR”**, J; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Enero de 2009; Pág. 2470. XX.2o. J/24.

Posible afectación temporal	Mediano plazo  Puede generar descontento entre la ciudadanía al no poder concluir en su totalidad la ejecución del proyecto.	Mediano plazo.  Puede generar descontento entre la ciudadanía al no poder concluir en su totalidad la ejecución del proyecto
Análisis de monto total	De conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en la sentencia TECDMX-JEL-283/2025, los recursos del presupuesto participativo deben destinarse exclusivamente a proyectos que generen un beneficio comunitario real, de disfrute común y acceso libre para las personas habitantes de la unidad territorial, particularmente en el caso de unidades habitacionales, donde su aplicación debe recaer en áreas, bienes o servicios de uso común. En este sentido, del análisis del proyecto se advierte que la intervención propuesta se orienta a un espacio o elemento cuyo aprovechamiento resulta limitado a un sector específico, condicionado o de uso privativo, por lo que no garantiza un impacto colectivo ni fortalece el desarrollo comunitario en términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. En consecuencia, al no acreditarse el requisito de beneficio comunitario generalizado ni el carácter de uso común, se determinó que el proyecto resulta no viable, entendiéndose dictamen en sentido negativo.	De conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en la sentencia TECDMX-JEL-283/2025, los recursos del presupuesto participativo deben destinarse exclusivamente a proyectos que generen un beneficio comunitario real, de disfrute común y acceso libre para las personas habitantes de la unidad territorial, particularmente en el caso de unidades habitacionales, donde su aplicación debe recaer en áreas, bienes o servicios de uso común. En este sentido, del análisis del proyecto se advierte que la intervención propuesta se orienta a un espacio o elemento cuyo aprovechamiento resulta limitado a un sector específico, condicionado o de uso privativo, por lo que no garantiza un impacto colectivo ni fortalece el desarrollo comunitario en términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. En consecuencia, al no acreditarse el requisito de beneficio comunitario generalizado ni el carácter de uso común, se determinó que el proyecto resulta no viable, entendiéndose dictamen en sentido negativo.
Atiende la necesidad señalada en el proyecto	Advierte que la intervención propuesta se orienta a un espacio cuyo aprovechamiento resulta limitado a un sector específico, por lo que no garantiza un impacto colectivo ni fortalece el desarrollo comunitario en términos de la LPCCM.	No.

Consecuentemente, la parte actora presentó escrito de aclaración, en el que esencialmente señaló:

- Que el dictamen carecía de fundamentación y motivación, al contener afirmaciones genéricas sin sustento técnico ni jurídico en los rubros evaluados.
- Respecto de la inviabilidad técnica, que la autoridad únicamente refirió la falta de viabilidad presupuestal, sin precisar los elementos técnicos, metodológicos o parámetros utilizados, ni los requisitos incumplidos por el proyecto.
- En cuanto a la inviabilidad jurídica, el dictamen no identificaba las disposiciones legales presuntamente vulneradas ni explicaba por qué el proyecto se ubicaba en un supuesto de improcedencia.
- Por lo que hace al impacto ambiental, la autoridad emitió una determinación ambigua, sin realizar un análisis técnico o jurídico, ni señalar las normas aplicables o su posible incumplimiento.
- En relación con la inviabilidad financiera, sostuvo que no se expusieron criterios, análisis de costos ni elementos presupuestales que sustentaran la supuesta insuficiencia del presupuesto.
- En lo relativo al impacto de beneficio comunitario y público, precisó que el dictamen contenía una conclusión contradictoria y carente de desarrollo argumentativo.

De esta forma, se advierte que la autoridad responsable citó precepto jurídico aplicable, expresando para tal caso la motivación considerada para cada uno de los rubros, por lo que es claro que **cumplió con el deber de fundar y motivar** el acto materia de controversia.

Por consiguiente, se desprende que el Órgano Dictaminador se ajustó a lo establecido en el artículo 126, último párrafo, de la Ley de Participación.

Es por tanto, que los agravios expuestos por la parte actora resultan **infundados**.

Lo anterior, al advertirse de las constancias que obran en autos, de los re-dictámenes controvertidos, que el órgano dictaminador sí precisó los elementos normativos y técnicos que sustentan la determinación de inviabilidad de los proyectos, exponiendo las razones por las cuales estos no cumplen con los criterios de viabilidad jurídica y financiera, así como con el impacto de beneficio comunitario exigido por la normativa aplicable.

Por otra parte, no asiste razón a la parte actora cuando sostiene una falta de exhaustividad, ya que de la lectura integral de los escritos de aclaración de la parte actora no se desprenden elementos que sirvan de apoyo para controvertir las razones y fundamentos en los que la responsable basó su determinación; además de que no aportado algún elemento probatorio que derrotara la manifestación de la autoridad responsable, ni controvirtió frontalmente lo manifestado por éste ya que únicamente se limitó a referir que el dictamen primigenio adolecía de una debida fundamentación y motivación en contravención a al marco normativo constitucional y de participación ciudadana.

En ese sentido, el hecho de que la determinación adoptada no resulte favorable a los intereses de la parte actora no implica, por sí mismo, una vulneración al principio de exhaustividad ni a los derechos de legalidad y seguridad jurídica.

Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que la parte actora centra su inconformidad en alegaciones genéricas relativas a la supuesta falta de fundamentación y motivación del dictamen impugnado, sin que de su escrito se desprenda un auténtico ejercicio de confrontación jurídica con las razones que sustentan la determinación de inviabilidad.

En efecto, sus manifestaciones se limitan a cuestionamientos abstractos sobre la ausencia de desarrollo argumentativo por parte de la autoridad responsable, sin aportar elementos técnicos, jurídicos o probatorios que desvirtúen, de manera directa y eficaz, las consideraciones específicas que sirvieron de base para calificar el proyecto como no viable.

Así, la parte actora omite demostrar, por ejemplo, que su propuesta cumple con los parámetros técnicos exigibles, que resulta jurídicamente procedente conforme al marco normativo aplicable, que es financieramente viable o que genera un impacto comunitario acorde con la finalidad del presupuesto participativo, limitándose a trasladar la carga argumentativa a la autoridad responsable.

En este sentido, no basta que un proyecto supere uno o varios de los rubros de viabilidad, sino que es menester que supere todos, exigencia que resulta razonable, porque la selección de los proyectos que habrán de ser puestos a la consideración de la ciudadanía en la jornada consultiva deberá ser aquellos que propongan un mejor y mayor beneficio a la comunidad, por ser este uno de los objetivos

principales del presupuesto participativo, como mecanismo de participación ciudadana.

De ahí que, el estudio y análisis de cada una de las propuestas que se sometan a consideración del órgano dictaminador deberán superar, todos los rubros del test de viabilidad y factibilidad.

Así, ante lo **infundado** de los agravios manifestados por la parte actora, y al persistir la calificación negativa de más de uno de los rubros, lo conducente es confirmar la inviabilidad del Proyecto.

Sin que sea óbice a lo anterior, que el promovente solicitó en su escrito de demanda que este Tribunal Electoral en plenitud de jurisdicción determine la viabilidad de su proyecto, sin embargo, dado el sentido de la presente resolución, es que dicha solicitud resulta **inatendible**.

En consecuencia, se declara inviable el Proyecto.

Finalmente, dado que en la emisión de la Convocatoria, el IECM señaló la forma en computar los plazos, así como la fecha límite para promover medios de impugnación en contra de las redictaminaciones, se **conmina** al Instituto Electoral de la Ciudad de México a que, en futuras Convocatorias relacionadas con la consulta sobre Presupuesto Participativo y, en general, vinculadas con ejercicios de participación ciudadana, se abstenga de señalar fechas concretas relacionadas con los plazos para presentar medios de impugnación. Lo anterior a efecto de evitar confusión en la población y no generar falsas expectativas de derecho.



Por lo expuesto y fundado se:

## **RESUELVE**

**ÚNICO.** Se **Confirma** la segunda dictaminación realizada por el órgano dictaminador de la Alcaldía Azcapotzalco, respecto de los proyectos denominados "Arquitectura Sustentable en Obras de Arte Urbanas (Diseño Experimental)", correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2026-2027 de la Consulta de Presupuesto Participativo.

**CONCLUYE VOTO PARTICULAR QUE DE FORMA CONJUNTA FORMULAN LOS MAGISTRADOS ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ Y OSIRIS VÁZQUEZ RANGEL, RELATIVO A LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS ELECTORALES EN LOS QUE SE DESECHAN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA.**

**ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE**

**JOSÉ JESÚS HERNÁNDEZ  
RODRÍGUEZ  
MAGISTRADO**

**LAURA PATRICIA JIMÉNEZ  
CASTILLO  
MAGISTRADA**

KARINA SALGADO  
LUNAR  
MAGISTRADA

OSIRIS VÁZQUEZ  
RANGEL  
MAGISTRADO

LUCÍA HERNÁNDEZ CHAMORRO  
SECRETARIA GENERAL

*“Este documento es una versión pública de su original, motivo por el cual los datos personales se han eliminado de conformidad con los artículos 100, 106, 107 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, fracciones XII, XXII, XXIII y XLIII, 169, 176, 177 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y los numerales segundo, fracciones XVII y XVIII, séptimo, trigésimo octavo, quincuagésimo sexto, sexagésimo y primero de los Lineamientos de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, y numeral 62 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, colocándose en la palabra testada un cintillo negro”.*